



UCAB

Esta es una publicación
del Centro de Estudios
Políticos de la Universidad
Católica Andrés Bello

Benigno Alarcón

Director del Centro de
Estudios Políticos - UCAB

Juan Manuel Trak

Investigador Centro de
Estudios Políticos - UCAB

Daniel Fermín

Investigador Centro de
Estudios Políticos - UCAB

Editor Política UCAB

**Juan Manuel Trak y Daniel
Fermín**

Redacción e investigación

Reinaldo J. Hernández S.

Diseño Gráfico

Edgiannid Figueroa

Montaje

CONTENIDO

PÁGINA 1

Resolución de los conflictos
poselectorales

PÁGINA 2

La legislación venezolana

PÁGINA 4

Impugnaciones del 6 de
diciembre de 2015

PÁGINA 6

Consecuencias para la
Integridad Electoral

Resolución de los conflictos poselectorales

En el marco de la integridad electoral, la resolución de los conflictos poselectorales constituye una dimensión fundamental para garantizar la transparencia, competitividad y confianza en resultado de los comicios. Esto supone la existencia de un conjunto de normas y procedimientos preestablecidos y aceptados por los actores políticos con el fin de que diriman las controversias de manera imparcial y justa. En este sentido, siguiendo lo expuesto por ACE Project “Para mantener las normas de rendición de cuentas y transparencia es importante que todas las quejas e impugnaciones sean investigadas y no solo aquellas suficientemente serias para poner en duda la validez de los resultados. Incluso las quejas aparentemente molestas pueden ser manipuladas para provocar dudas sobre la integridad de la logística si no son atendidas de manera pública y abierta. La existencia de mecanismos transparentes y efectivos para resolver las quejas e impugnaciones pueden no solo ayudar a identificar y combatir actividades fraudulentas, sino ayudar a identificar y corregir cualquier error que puedan cometer los oficiales de votación durante el desempeño de sus actividades.”¹

En resumen, los mecanismos para la resolución de disputas electorales no solo deben determinar si las irregularidades suponen cambios en el resultado final de una elección, sino también una forma de identificar los aspectos en donde el proceso electoral muestra fallas con el fin de realizar las reformas necesarias que eviten que se repitan esas malas prácticas en las siguientes elecciones.

Según el ACE Project, los sistemas para el manejo de impugnaciones a los resultados electorales funcionan de manera más efectiva cuando los canales para realizar tales reclamos son simples y claros, y las instituciones responsables de llevar adelante las investigaciones tienen claras sus competencias y los límites de su acción. Por el contrario, sistemas complejos de resolución

Settling post-election disputes

Within the framework of electoral integrity, the settlement of post-election disputes is an aspect that is fundamental when it comes to guaranteeing transparency, competitiveness and confidence in the outcome of the election. This requires the existence of a set of pre-established rules and procedures, accepted by the political actors, for the fair and impartial settlement of any disputes. In this regard, as stated by the ACE Project, “It is important for maintaining standards of accountability and transparency that all complaints about and challenges... are investigated, not just those sufficiently serious to raise doubts about the validity of election outcomes. Even apparently vexatious complaints, if not openly and publicly answered, can be manipulated to raise doubts about voting operations integrity. Effective and transparent complaint resolution and challenge mechanisms can identify and combat not only any fraudulent activities or wrongdoing, but can ensure that any errors made by voting station officials in the course of their duties can be identified and corrected.”¹

In other words, not only must the mechanisms for the settlement of electoral disputes determine whether the irregularities mean that the final results of the election are different, they must also be a means for identifying aspects where there are flaws in the electoral process so that the necessary changes can be made to prevent a repetition of these bad election practices in future elections.

According to the ACE Project, the systems for managing challenges to election results are more effective when the channels for presenting the challenges are simple and clear and the institutions in charge of handling the investigations are clear about their authority and the limits to their actions. Whereas, on the contrary, complex systems for the settlement of disputes, where the procedures to be followed when challenging results are not clear, or when



de conflictos, en los que no se tienen claros los procedimientos para impugnar resultados o no se tiene bien delimitados los alcances que tienen las instituciones para tal fin generan dudas y desconfianza sobre las elecciones y el organismo electoral. En este orden de ideas, “La existencia de múltiples vías para presentar una impugnación o apelación puede crear confusión y retrasar su resolución, sobre todo cuando las partes agraviadas tratan de seleccionar el foro más favorable para una decisión” (ACE Project).

En este sentido, las buenas prácticas electorales establecen que la primera instancia para la resolución de las controversias debe ser el propio organismo electoral, en cuyo seno deben existir procedimientos claros para llevar adelante apelaciones a sus decisiones y la posibilidad de determinar la validez o no del proceso electoral. Estas atribuciones deben estar claramente establecidas en la legislación electoral y, en consecuencia, respetadas por el resto de las instituciones. Una vez agotada esta vía, las decisiones del organismo electoral pueden ser apeladas ante una instancia judicial.

La legislación venezolana

En Venezuela, la resolución de conflictos poselectorales está regulada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Según la LOPRE, el Poder Electoral es la máxima autoridad jerárquica para procesar los recursos administrativos. El artículo 195 de la LOPRE establece que:

“Los actos de los organismos subordinados y de los organismos subalternos del Poder Electoral podrán ser recurridos, en sede administrativa, por ante el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad jerárquica.

Los actos, omisiones o actuaciones del Consejo Nacional Electoral agotan la vía administrativa y sólo podrán ser recurridos por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.”

Por otro lado, en caso de que se incurra en un delito electoral la competencia para juzgar dichos actos corresponde a la jurisdicción penal ordinaria (Artículo 198 LOPRE). De manera que todo acto que tenga como propósito impugnar el resultado de la elección debe pasar primero por el Consejo Nacional Electoral como máximo organismo responsable para dirimir las controversias electorales y será el

the scope of the authority that the institutions have for this purpose are not properly defined, give rise to doubts and distrust of the elections and the election agency itself. In this regard, “[m]ultiple avenues of initial complaint or appeal... may not only confuse but delay resolution of complaints or challenges, as aggrieved parties ‘shop’ for a favourable forum of decision.” (ACE Project).

In this case, good election practices require that the first stage for the settlement of disputes should be the election agency itself, where there should be clearly established procedures for handling appeals to its decisions and the possibility of determining the validity or otherwise of the election process. This authority should be clearly set out in the electoral laws and regulations and, therefore, be honored by the other institutions. Once a decision is reached at this level, the electoral agency’s decision may be appealed at the judicial level.

Venezuelan law

In Venezuela, the settlement of post-election disputes is governed by the Electoral Processes Act (LOPRE). Under this law, the Electoral Branch is the top authority for processing administrative appeals. In the words of Article 195 of the LOPRE:

Administrative appeals against actions by subordinate agencies and agencies under the authority of the Electoral Branch may be submitted to the National Electoral Council as the highest level of hierarchic authority.

No administrative appeals may be filed against acts, omissions or actions of the National Electoral Council; appeals against these may only be submitted to the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice.

On the other hand, in the event that an electoral crime has been committed, this type of action must be judged by the ordinary criminal jurisdiction (article 198 of the LOPRE). Therefore, any action aimed at challenging the result of an election must first be filed at the National Electoral Council, as the top-level agency in charge of settling electoral disputes and it is this, the

Poder Electoral el que decida si corresponde la impugnación de una elección determinada e imponga las sanciones administrativas que correspondan según la falta encontrada (Artículo 200 LOPRE). Estas decisiones, una vez tomadas, podrán ser impugnadas únicamente ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 202). Según la propia LOPRE, el procedimiento para impugnación es como sigue:

1. Todo recurso que tenga como propósito impugnar un elección debe presentarse ante del CNE “dentro de los veinte días hábiles siguientes a la realización o emisión del acto o de su publicación; de la ocurrencia de los hechos, actuaciones materiales o vías de hecho...” (Artículo 203).

2. Dicho recurso se admite dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción (Artículo 207), y se publicará en la Gaceta Electoral para que los interesados puedan presentar sus alegatos y pruebas (Artículo 208).

3. La sustanciación del expediente se hará en los treinta días siguiente a su publicación, pudiéndose prorrogar este lapso treinta días más según la complejidad de la impugnación (Artículo 209).

4. La resolución se debe emitir a los 15 días del cierre de la sustanciación de la impugnación (Artículo 210).

Es importante señalar que el artículo 212 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que: “La sola interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero el Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de efectos del acto recurrido, en caso de que su ejecución pueda causar perjuicios irreparables al interesado o interesada o al proceso electoral de que se trate.”

Dentro de la LOPRE, también se establece el ámbito de intervención del poder judicial mediante un “Recurso Contencioso Electoral contra los actos, omisiones o actuaciones del Consejo Nacional Electoral”(Artículo 213), que debe ser presentado dentro de los quince días hábiles luego de la realización del acto electoral.

En este sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que

“Artículo 27. Es de la competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia: I.

Electoral Branch of government, that will decide whether there are grounds to challenge a given election and impose the appropriate administrative penalties for the irregularity found (article 200 - LOPRE). Once taken, these decisions may only be appealed before the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice (article 202). Based on the LOPRE, the steps to be followed when challenging an election are:

1. Any appeal filed for the purpose of challenging an election must be filed at the CNE “no later than 20 business days after the act occurred or was issued or was published, after the occurrence of the events, the material action or use of force ...” (article 203).

2. The appeal is admitted within five business days following receipt (article 207) and must be published in the Electoral Gazette so that any interested parties may present their arguments and evidence (article 208).

3. The case is to be studied over a period of 30 days following publication, a term that may be extended an additional 30 days depending on the complexity of the challenge (article 209).

4. The resolution must be issued no later than 15 days after completion of the examination of the challenge (article 210).

It is important to point out that article 212 of the Electoral Processes Act states that: “The mere filing of a challenge shall not cause suspension of enforcement of the event being challenged; nevertheless, the National Electoral Council may, at its own initiative or at the request of a party, agree to suspend the effects of the event being challenged if enforcement thereof could cause irreparable harm to the interested party or to the electoral process involved.”

The LOPRE itself also deals with the scope of any intervention by the judiciary in the form of an “Electoral Litigation Appeal against acts, omissions or actions by the National Electoral Council” (article 213), which would have to be filed no later than 15 business days after the date of the election.

In this regard, the Law Governing the Supreme Tribunal of Justice states:

Article 27. The Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice shall have jurisdiction:

I. To hear electoral litigation complaints filed against acts, actions and omissions of the bod-



Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento...”

Así pues, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es una instancia para resolución de conflictos poselectorales que busca dar respuesta a actuaciones provenientes del Consejo Nacional Electoral, es decir, es una instancia en la que se puede apelar las decisiones emanadas del Poder Electoral.

Impugnaciones del 6 de diciembre de 2015

El 29 de diciembre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió impugnaciones para seis circunscripciones en las que resultaron vencedores candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a saber: voto lista y circuito 1 del estado Amazonas, circuito 2 del estado Yaracuy y los circuitos 2, 3 y 4 del estado Aragua, así como el representante indígena de la región Sur. Todas las medidas solicitaron la impugnación del acto de votación, totalización y proclamación de los 10 diputados electos en esas seis circunscripciones, y medidas cautelares con el fin de que no pudiesen juramentarse como diputados el 5 de enero de 2016.

Al día siguiente, la Sala Electoral admitió todas las impugnaciones, aunque declaró improcedente las medidas cautelares, salvo la correspondiente al estado Amazonas en la que declaró procedente suspender el acto de totalización, adjudicación y proclamación de los tres diputados correspondientes a dicho estado, así como el representante indígena²; lo que supone que los electores de dicho estado no tienen representación ante el parlamento nacional. Esta decisión se basó en el supuesto hecho de que una funcionaria de la gobernación de Amazonas compró votos, lo cual fue denunciado por el jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, quien reprodujo la grabación de la supuesta funcionaria³.

Cabe destacar que estas impugnaciones fueron recibidas por la Sala Electoral luego de que este

ies of the Electoral Branch, both those directly related with election processes and those related with its organization, administration and operation...”

In other words, the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice is the level of authority for the settlement of post-election disputes entrusted with deciding on actions taken by the National Electoral Council, in other words an authority where appeals against decisions adopted by the Electoral Branch may be filed.

Challenges involving December 6, 2015

On December 29th the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice admitted challenges involving six districts in which Democratic Unity Roundtable (MUD) candidates had won, namely: vote by list and district 1 in Amazonas State, district 2 in Yaracuy State, and districts 2, 3 and 4 in Aragua State, as well as the native representative for the Southern Region. All involved challenges to the ballots, the vote count and proclamation of the 10 members of parliament elected in these six districts and asked for precautionary measures to prevent these candidates from taking office on January 5, 2016.

The following day the Electoral Chamber admitted all the challenges, although it did decide against the precautionary measures except in the case of Amazonas State, where it agreed to order suspension of the vote-count, determination of the winner and proclamation in the case of the three Assembly members for that state as well as the native representative². Therefore, the voters from that state have been left with no representatives in parliament. This decision was based on the allegation that an official from the Amazonas State governor's office had bought votes, as claimed by the PSUV campaign director, Jorge Rodríguez, who presented a tape recording of the alleged official³.

It is necessary to point out that these challenges were received by the Electoral Chamber after the Tribunal had already announced a recess lasting from December 11, 2015 until the first

tribunal hubiese anunciado que no habría actividad judicial entre el 11 de diciembre de 2015 y la primera semana del mes de enero de 2016. Sin embargo, la Sala Electoral reabrió sus puertas entre 28 y 30 de diciembre con el fin de recibir los recursos interpuestos por los candidatos del PSUV.

Así mismo, dos de los miembros de la Sala Electoral, Christian Zerpa y Fanny Márquez, fueron designados magistrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional a través de un procedimiento que fue calificado como inconstitucional por sectores académicos del país⁴. Ambos jueces estuvieron vinculados al PSUV y al gobierno hasta el momento de su nombramiento como miembros de la Sala Electoral del TSJ. Christian Zerpa fue diputado por el estado Táchira entre 2010 y 2015, mientras que Fanny Márquez se desempeñaba como Vicepresidente de la Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) designada por el Presidente Maduro⁵.

Esta decisión trajo como consecuencia un conflicto entre la nueva Asamblea Nacional dominada por diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y el Tribunal Supremo de Justicia. Reduciendo el número de diputados en cuatro (de 167 a 163), tres de los cuales pertenecen a la MUD (de 112 a 109) y un al PSUV (de 55 a 54). Para los diputados opositores, la Sala Electoral no tenía competencia para vulnerar, por medio de un acto administrativo, la voluntad popular expresada por las urnas, tal como lo declaró la Sala Constitucional del TSJ en enero de 2013⁶. Sin embargo desde el gobierno se ha insistido en la superioridad de la Sala Electoral para anular el resultado proceso electoral en dicho estado.

Ante esta decisión, la nueva directiva de la Asamblea Nacional, juramentada el 5 de enero de 2015, decidió admitir como diputados a dos diputados de Amazonas y el representante indígena de la región sur, los cuales fueron juramentados el 6 de enero⁷. Esta decisión se fundamentó en el artículo 187 numeral 20 de la Constitución que indica que “Corresponde a la Asamblea Nacional:... 20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”.

week in January 2016. Despite this, the Electoral Chamber opened its doors from December 28th to 30th to receive the challenges filed by PSUV candidates.

In addition, two justices from the Electoral Chamber, Christian Zerpa and Fanny Márquez, had been appointed justices by the National Assembly on December 23, 2015 following a procedure that has been considered unconstitutional by scholars in the country⁴. Both justices had close ties with the PSUV and the government up until the date of their appointment to the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal. Christian Zerpa was a congressman for Táchira State from 2010 to 2015, while Fanny Márquez had been a vice president at the National Foreign Trade Center (CENCOEX), appointed by President Maduro⁵.

This decision led to a dispute between the new National Assembly, where the Democratic Unity Roundtable has a majority, and the Supreme Tribunal of Justice and reduced the number of members of the AN by four (from 167 to 163), three from the MUD (from 112 to 109) and one from the PSUV (from 55 to 54). In the opinion of the opposition members, the Electoral Chamber lacks the authority to use an administrative measure to go against the will of the people as expressed in the polls, as stated by the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal in January 2013⁶. The government, however, has insisted on the supremacy of the Electoral Chamber that would allow it to declare the electoral result in that state null and void.

Faced with this decision, the new leadership in the National Assembly, sworn in on January 5, 2016, decided to include the two members from Amazonas and the native representative from the southern region and they were sworn in on January 6th⁷. The decision was based on article 187, section 20 of the Constitution, which provides that “It is up to the National Assembly... 20. To qualify its members and consider their resignations. The temporary separation of a member may only be agreed with the votes of two thirds of the members present.”

This action prompted the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal to declare that the new leaders of the National Assembly, together with the members from Amazonas who had been sworn in, were in contempt and that all ac-



Esta actuación condujo a que la Sala Electoral del TSJ declarase en desacato a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, así como los diputados de Amazonas juramentados, y a declarar nulos todos los actos del Poder Legislativo hasta la desincorporación de los mismos⁸. El 14 de enero los diputados en conflicto solicitaron su desincorporación de la Asamblea Nacional con el fin de enfrentar el proceso judicial⁹.

Finalmente, ninguno de los del Consejo Nacional Electoral como cuerpo colegiado, no los rectores a título individual, han emitido comunicado oficial u opinión sobre la controversia presentada sobre los diputados del estado Amazonas y el representante indígena de la región sur.

Consecuencias para la Integridad Electoral

Los hechos anteriores constituyen un socavamiento de la integridad electoral en Venezuela, así como una amenaza al funcionamiento de democracia en el país. La medida cautelar emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia amenaza el derecho de representación política de los ciudadanos del estado Amazonas, así como la representación indígena de la región sur. El derecho al sufragio tiene una dimensión tanto individual como colectiva, y en este sentido, la Sala Electoral ha debido ponderar, ante la tutela del derecho demandado en el recurso contencioso electoral, el perjuicio que genera al derecho general de un colectivo al dejar sin representación política de una parte de la ciudadanía, afectando además la composición total de la Asamblea, para proteger los derechos individuales de los demandantes, fundamentados en supuestos hechos que aún debes ser debidamente probados.

Además, toda medida de amparo cautelar debe tener un propósito: restablecer de inmediato, aunque de forma provisional, la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella, de modo que la presunta violación al derecho constitucional cuya tutela se exige no se haga irreparable para el momento en que finalice el juicio contencioso-electoral.

En este orden de ideas, no se entiende cómo pueden garantizarse los derechos constitucio-

tions taken by the Legislative Branch would be considered null and void until those members stepped down⁸. On January 14th the challenged members asked to be removed from the National Assembly in order to deal with the judicial procedure⁹.

So far none of the members of the National Electoral Council, neither as a body nor in a individual capacity, has made any official statement or voiced any opinion regarding the dispute over the congressmen from Amazonas and the native representative from the southern region.

Consequences for Electoral Integrity

The events described above undermine electoral integrity in Venezuela and pose a threat to democracy in the country. The precautionary measure ordered by the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal subverts the right to political representation of the people of Amazonas State as well as that of the native population in the southern region. The right to vote has both an individual as well as a collective side and, this being the case, when seeking to protect the right being claimed in the electoral appeal, the Electoral Chamber should have considered the harm that this would do to the general right of the collective by leaving a group of citizens without political representation, and also affecting the overall makeup of the National Assembly, for the purpose of protecting the individual rights of the plaintiffs based on alleged facts that had yet to be properly proven.

Furthermore, all precautionary injunctions must aim at a single purpose: the immediate, even if only temporary, reinstatement of the legal situation that was violated, or the closest possible situation, to prevent the alleged violation of a constitutional right whose protection is being sought from becoming irreparable by the time the electoral litigation case is decided.

This being the case, it is hard to understand how the constitutional rights of the plaintiff who is requesting the annulment of the election are

nales del demandante de la nulidad del acto de votación impidiendo la toma de posesión de diputados cuya elección debe presumirse legítima salvo prueba en contrario, lo cual es objeto del juicio contencioso-electoral. De hecho, la única forma de revertir los efectos de los mencionados actos electorales es anulando la elección, cuya consecuencia es la vacante en los escaños y la posterior convocatoria de un nuevo acto electoral. Esto significa que la decisión de amparo cautelar que ha pronunciado la Sala Electoral tiene unos efectos similares a la vacante que produce la nulidad de la elección, y en este sentido, es un anticipo de la sentencia definitiva del caso.

De manera que, los actos del Tribunal Supremo de Justicia suponen una usurpación de la voluntad expresada por los ciudadanos en esas circunscripciones, lo que constituye un antecedente que amenaza la integridad de los procesos y resultados electorales en Venezuela.

Pero más aún, el silencio del Consejo Nacional Electoral ante esta situación también muestra la ausencia de capacidad institucional del Poder Electoral para contribuir a la resolución de un conflicto del cual es parte.

Desde el punto de vista de la legislación nacional, el Proyecto Integridad Electoral Venezuela señaló una serie de deficiencias de la legislación electoral en el tema relativo a la resolución de conflictos electorales. Tal como señala Urosa¹⁰ (2014, pp.374), “la legislación en esta materia no establece de manera clara cuál es ese ámbito de revisión en materia electoral, lo que genera dudas que deben aclararse”.

En este orden de ideas, las dudas sobre este particular son, según Urosa (2014), las siguientes:

1. Es imprecisa la Ley al definir el objeto y fin de los recursos administrativos y judiciales electorales.
2. Es imprecisa la Ley al establecer la oportunidad de control administrativo y judicial según el órgano que dicta el acto impugnado.

De manera que las deficiencias contenidas en la legislación electoral venezolana, así como el uso político que se hace de la justicia en el país deja espacio para la confusión y manipulación del sistema al momento de llevar adelante procesos de impugnación de los resultados electorales.

being protected by preventing the swearing in of members of congress whose election should be considered legitimate until there is proof to the contrary in the electoral trial. The fact is that the only way to reverse the effects of the electoral actions taken would be to declare the election null and void, leaving the seats in the Assembly vacant, and calling a new election. This means that the end result of the injunction handed down by the Electoral Chamber is similar to that caused by declaring the election null and void and, therefore, is actually an anticipated final decision of the case.

Therefore, the actions taken by the Supreme Tribunal of Justice are tantamount to usurpation of the will of the voters in these districts, a precedent that poses a threat to the integrity of electoral processes and results in Venezuela.

Moreover, the silence on the part of the National Electoral Council with regard to this situation is also a sign of a lack of institutional capacity by the Electoral Branch to contribute to a settlement of a dispute in which it is a party.

From the standpoint of domestic legislation, the Venezuela Electoral Integrity Project pointed out a number of shortcomings in the case of electoral laws and regulation on the matter of settlement of electoral disputes. As stated by Urosa¹⁰ (2014, pp.374), “legislation in this area does not clearly state the scope of electoral review, leaving doubts that must be cleared up.”

In this specific case, the doubts that have not been cleared up, according to Urosa (2014), are:

1. The law is not clear when defining the purpose and goal of administrative and judicial electoral appeals.
2. The law is not clear when determining the timing for administrative and judicial control depending on the body that issues the act being challenged.

Therefore, the shortcomings of Venezuelan electoral legislation, together with political use made of the justice system in the country, leave space for confusion and manipulation of the system when the time comes to carry out procedures for challenging electoral results.



Referencias

References

¹ Ver: [ACE Project](#)

² Ver: [Tribunal Supremo de Justicia](#)

³ Ver: [Descifrado](#)

⁴ Ver: [El Pitazo](#)

⁵ Ver: [El Pitazo](#)

⁶ Ver: [Diario Tal Cual](#)

⁷ Ver: [El Mundo](#)

⁸ Ver: [Tribunal Supremo de Justicia](#)

⁹ Ver: [El Universal](#)

¹⁰ Urosa, Daniela. (2014). Resolución de Conflictos Electorales, Revisión Administrativa y Judicial de Actos Electorales. En Benigno Alarcón y Jesús María Casal. Proyecto Integridad Electoral Venezuela, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, pp. 329-367.